

ANUNCI

Suspensión de plazos y ejecución de contratos COVID 19

En fecha 25 de marzo de 2020, el Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio del Excmo. Ayuntamiento de Castelló de la Plana, ha dictado el decreto 2020-2018, de suspensión de plazos y ejecución de contratos COVID 19:

“El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID 19 así como la crisis del coronavirus en sí misma impactan de manera severa en los procedimientos de adjudicación de los contratos del sector público, así como en la ejecución de los contratos ya formalizados y en vigor.

Respecto a los procedimientos en tramitación, la disposición adicional tercera de dicho real decreto, de manera generalizada indica: *“Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo”*.

Esta medida se aplica a todo el sector público definido en la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común donde su artículo 2.1 c) comprende a las entidades que integran la Administración Local. Por tanto desde la perspectiva de la preparación y adjudicación de contratos la suspensión de plazos resulta aplicable a los distintos hitos o actuaciones de los procedimientos que en estos momentos se encuentran en tramitación.

La Abogacía del Estado ha precisado en informe de 16 de marzo que, *“atendiendo a una interpretación literal, sistemática y finalista de la norma, hay que entender que se produce una suspensión automática de todos los procedimientos que tramiten las entidades del sector público, y ello sin distinción de sujetos ni de procedimientos”*. En ese informe hace expresa referencia a su aplicación a todos los procedimientos administrativos sujetos a la LCSP.

A este respecto debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con el citado real decreto los órganos de contratación están facultados para acordar motivadamente “las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad o cuando el interesado manifiesta su conformidad con que no se suspenda el plazo”.

Ello implica que el Real Decreto 463/2020 no limita, en ningún caso, el derecho de los interesados a presentar escritos, solicitudes e instancias ante la Administración que obviamente puede tener lugar por los sistemas y medios electrónicos que las administraciones públicas tienen habilitados actualmente. Por tanto la tramitación puede no suspenderse finalmente si la Administración decide que es procedente tramitar el procedimiento y así motivadamente lo dispone previa conformidad del interesado.

Igualmente, la suspensión de los respectivos plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos, de acuerdo con la disposición adicional cuarta del Real Decreto 463/2020 se verán suspendidos ello no impide obviamente que se puedan plantear voluntariamente las acciones correspondientes.

Estas consideraciones no son de aplicación a los procedimientos de contratación y resoluciones que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.



Con fecha de 18 de marzo de 2020, se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 8/2020 de medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, que tiene importante incidencia en relación a los contratos públicos vigentes a su entrada en vigor.

Además de las medidas de índole administrativa las que se adoptan en el RDL 8/2020 abarcan muchos y diferentes ámbitos de la actividad empresarial, incluyen medidas de apoyo individuales durante el estado de alarma, medidas para garantizar la liquidez y financieras, medidas extraordinarias para personas jurídicas de derecho privado, medidas de control de inversiones financieras, medidas de índole tributaria, medidas laborales y sociales tanto medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos y otros efectos negativos sobre el empleo y la viabilidad empresarial, fomento del teletrabajo, y adaptación de horarios y reducción de jornada mientras se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID 19.

En el ámbito administrativo el artículo 34 del Real decreto Ley 8/2020 prevé medidas en materia de contratación pública para paliar las consecuencias del COVID 19.

En dicho artículo se prevé la suspensión y ampliación del plazo de ejecución de los contratos administrativos típicos vigentes a su entrada en vigor regulando por separado los contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, los distintos de estos que no son de prestación sucesiva, los contratos de obras y la concesión de obras y de servicios.

Respecto a los primeros el punto 1 del citado artículo contempla la suspensión para el caso de que su ejecución devenga imposible como consecuencia del COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo, indicando que quedarán "*automáticamente suspendidos*" desde que se produjera la situación de hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación puede reanudarse. El órgano de contratación notificará al contratista el fin de la suspensión.

Se establece a cargo de la entidad contratante cuyo contrato ha quedado en suspenso la obligación de indemnizar al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por este durante el período de suspensión, previa solicitud y acreditación fehaciente de su realidad, efectividad y cuantía por el contratista.

El artículo refleja como posibles conceptos indemnizables básicamente gastos salariales que efectivamente hubiera abonado el contratista al personal que figurara adscrito con fecha 14 de marzo de 2020 a la ejecución ordinaria del contrato durante el período de suspensión, gastos por mantenimiento de garantía definitiva, alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria instalaciones y equipos relativos al período de suspensión del contrato, adscritos directamente a la ejecución del contrato siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos durante la suspensión del contrato y gastos derivados de pólizas de seguro previstas en los pliegos y que se encuentran vigentes durante el período de suspensión.

El artículo citado indica que la aplicación de lo indicado anteriormente solo procederá cuando el órgano de contratación, a instancia del contratista y en el plazo de cinco días aprecie la imposibilidad de ejecutar el contrato. Con dicha finalidad el contratista deberá dirigir una solicitud al órgano de contratación en la que recoja la siguiente información: razones por las que la ejecución del contrato ha devenido imposible; personal, dependencias, vehículos, maquinaria, instalaciones y equipos adscritos a la ejecución del contrato en ese momento; y los motivos que imposibilitan el empleo por el contratista de los medios citados en otro contrato. Las circunstancias que se pongan de manifiesto en la solicitud podrán ser objeto de posterior comprobación.

El apartado 2 del artículo 34 del RDL 8/2020 respecto a los contratos públicos de servicios y de suministro de prestación no sucesiva y por tanto distintos de los referidos en el apartado 1, vigentes el día 17 de marzo de 2020 y que no hubieran perdido su finalidad como consecuencia de la situación de hecho creada por el coronavirus prevé la ampliación del plazo para el caso de demoras en su cumplimiento por el contratista como consecuencia del COVID 19 o de las medidas adoptadas para combatirlo, y ofrezca el cumplimiento de sus compromisos si se le amplía el plazo inicial o la prórroga en curso.

El órgano de contratación le concederá un plazo adicional al menos igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. Se requiere para ello previo informe del



responsable del contrato (se entiende así la referencia del RDL al “Director de obra del contrato”), donde se determine que el retraso no es por causa imputable al contratista, sino que se ha producido como consecuencia del COVID-19. No procederá la imposición de penalidades al contratista ni la resolución del contrato.

En estos casos se reconoce a los contratistas el derecho al abono de los gastos salariales adicionales en los que efectivamente hubieran incurrido como consecuencia del tiempo perdido con motivo del COVID-19, hasta un límite máximo del 10 por 100 del precio inicial del contrato. Para el abono de esta indemnización es preciso la previa solicitud del contratista y la acreditación fehaciente de la realidad, efectividad y cuantía de dichos gastos.

El artículo 34.3 del RDL 8/2020 dicta las siguientes normas especiales para la suspensión de los contratos de obras vigentes a fecha de 17 de marzo, que no hubieran perdido su finalidad como consecuencia de la situación de hecho creada por el COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, y cuando esta situación genere la imposibilidad de continuar la ejecución del contrato el contratista podrá solicitar la suspensión del contrato desde que se produjera la situación de hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. Se entenderá que la prestación puede reanudarse cuando, habiendo cesado las circunstancias o medidas que la vinieran impidiendo, el órgano de contratación notificara al contratista el fin de la suspensión.

En este sentido el contratista deberá presentar una solicitud al órgano de contratación reflejando: las razones por las que la ejecución del contrato ha devenido imposible; el personal, las dependencias, los vehículos, la maquinaria, las instalaciones y los equipos adscritos a la ejecución del contrato en ese momento y los motivos que imposibilitan el empleo por el contratista de los medios citados en otro contrato.

El órgano de contratación dispone de cinco días para apreciar la imposibilidad de ejecución del contrato. Transcurrido el plazo indicado sin notificarse la resolución expresa al contratista, esta deberá entenderse desestimada.

El contratista podrá solicitar una prórroga en el plazo de entrega final de aquellas obras que, de acuerdo con el «programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra», estuviese previsto finalizar su ejecución entre el 14 de marzo, fecha de inicio del estado de alarma y durante el período que dure el mismo, y que, como consecuencia de la situación de hecho creada por el COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, no pueda terminar en la fecha prevista, siempre y cuando se comprometa a su cumplimiento en el plazo ampliado.

Acordada la suspensión, solo serán indemnizables los conceptos relativos a los gastos salariales que efectivamente abone el contratista al personal adscrito a la ejecución antes del 14 de marzo y continúa adscrito cuando se reanude la ejecución ordinaria del contrato, durante el período de suspensión, de acuerdo con el convenio colectivo aplicable, incluyendo los conceptos siguientes: salario base, complemento por discapacidad, gratificaciones extraordinarias retribución de vacaciones, o sus conceptos equivalentes (el art. 34.3 del RDL 8/2020, detalla los preceptos que regulan esos conceptos retributivos).

También lo serán los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, relativos al período de suspensión del contrato y los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos de la ejecución del contrato suspendido y su importe sea inferior al coste de la resolución de tales contratos de alquiler o mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos.

Asimismo, serán conceptos indemnizables los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y vinculadas al objeto del contrato que hayan sido suscritas por el contratista y estén vigentes en el momento de la suspensión del contrato.

El punto 4 del Real Decreto ley 8/2020 establece respecto a las concesiones de obras y concesiones de servicios que la suspensión deberá el órgano de contratación acordarla expresamente cuando, a instancia del contratista, aprecie “la **imposibilidad de ejecución del contrato**” como consecuencia del COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo.

En caso de acordar la suspensión, el RDL 8/2020 establece que dará derecho al concesionario al restablecimiento del equilibrio económico del contrato mediante la



ampliación de su duración inicial hasta un máximo de un 15 por 100 o mediante la modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato.

Dicho reequilibrio en todo caso **compensará a** los concesionarios por la **pérdida de ingresos y el incremento de los costes soportados**, entre los que se considerarán los posibles gastos adicionales salariales que efectivamente hubieran abonado, respecto a los previstos en la ejecución ordinaria del contrato de concesión durante en el período de duración de la situación de hecho creada por el COVID-19. Solo se procederá a dicha compensación **previa solicitud y acreditación fehaciente de la realidad, efectividad e importe por el contratista de dichos gastos**.

Ante la situación difícil y cambiante en la que nos encontramos, desde los distintos departamentos y servicios municipales junto con las concejalías competentes a medida que se van adoptando por el gobierno nuevas medidas para paliar la actual crisis sanitaria se analiza su incidencia respecto a los contratos en vigor. Las prestaciones contratadas por el Ayuntamiento de Castellón pueden sufrir diferentes incidencias, principalmente:

- Necesidad de garantizar la ejecución de determinadas prestaciones, ampliarlas o reducirlas, para atender mejor los servicios públicos esenciales que presta el Ayuntamiento y aquellos que reciben ciudadanos más vulnerables ante esta situación.
- Imposibilidad evidente y constatada de dificultad material de ejecución total o parcial en estos momentos en las condiciones contratadas.

Ante estas situaciones, habrá de adoptarse en cada caso la decisión que se estime más adecuada: continuación de la ejecución de aquellos contratos cuya ejecución no se vea impedida; modificación del contrato en virtud del artículo 205.2.be) LCSP; suspensión total o parcial y/o ampliación del plazo de ejecución de los contratos, con el régimen especial que regula el artículo 34 del RDL 8/2020 y en las concesiones, tanto si procede la continuación de las mismas como su suspensión temporal, restablecimiento del equilibrio económico.

De forma previa a este marco jurídico, la Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria y urgente (sin convocatoria previa) de 16 de marzo acordó:

PRIMERO.- *Se declaran expresamente en vigor aquellos contratos respecto de los que no se adopte un acuerdo municipal expreso de suspensión, sin perjuicio de las medidas que por las empresas contratistas o, en su caso, las subcontratistas se pudieran adoptar para velar por la seguridad y salud de sus trabajadores así como las que se deriven de otras autoridades competentes.*

SEGUNDO.- *Delegar en el concejal delegado de Patrimonio y contratación la competencia para suspensión de la ejecución de los contratos cuya adjudicación fuera de competencia de la Junta de Gobierno Local con el alcance y condiciones que se pudiera determinar.*

Por todo lo cual, en el ejercicio de la citada competencia delegada y consultados los departamentos implicados, RESUELVO

Primero.- Establecer las siguientes reglas en relación con los expedientes de contratación en tramitación o que vayan a iniciarse durante la duración del estado de alarma acordada por decreto 463/2020:

- Los actos preparatorios de los expedientes de contratación, incluidos pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas se podrán seguir tramitando con normalidad.
- La fase de aprobación del expediente quedará paralizada, salvo que excepcionalmente por razones de interés público debidamente motivadas se acordara por el órgano de contratación su continuidad, y sin perjuicio de que la publicación de la licitación se demore al levantamiento del estado de alarma.
- Los trámites relativos a estudio de ofertas seguirán su curso con normalidad.
- Los expedientes que pudieran encontrarse en fase de presentación de ofertas, los plazos establecidos quedarán interrumpidos, reanudándose al día siguiente a aquél en que finalice el estado de alarma.
- En aquellos expedientes que se encuentren en fase de presentación de documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos a la adjudicación o de justificación de



bajas temerarias o de cualquier tipo de subsanación, se podrá continuar con la tramitación del expediente si los interesados voluntariamente lo aceptan.

- En cualquier fase del procedimiento y siempre que se considere oportuno por el órgano de contratación podrá convocarse mesa de contratación que será constituida telemáticamente.

-En cuanto a los contratos adjudicados se podrán formular cualesquiera requerimientos posteriores a los contratistas si previamente lo aceptan.

- Quedara suspendida su formalización, salvo que excepcionalmente por la finalidad del contrato y por circunstancias de interés público debidamente justificadas y siempre que las circunstancias actuales no lo impidieran, se considerara conveniente iniciar la prestación. En todo caso se recabara la conformidad del contratista. La formalización, en su caso, se practicará por medios electrónicos sin necesidad de desplazamiento del contratista a la sede del órgano de contratación.

Segundo.- Continuar con la tramitación de aquellos contratos cuya adjudicación ya se haya acordado, si la ejecución material de sus prestaciones se estima necesaria y es posible llevarlas a cabo en la actual situación, siempre y cuando el empresario adjudicatario muestre su conformidad y se comprometa a adoptar las precauciones indicadas por las autoridades sanitarias para evitar contagios.

Tercero.- Continuar los procedimientos en aquellos contratos referidos a prestaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios, publicando la continuación del procedimiento.

Cuarto.- Suspender los siguientes contratos de servicios suscritos por este Ayuntamiento dado que resulta patente que su ejecución ha devenido imposible como consecuencia de las medidas adoptadas por el estado como consecuencia del Covid 19, con efectos a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 463/2020 en que se produjo la situación de hecho que ha impedido su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse, notificándose al contratista el fin de la suspensión:

Negociado	Objeto	Fecha adjudicación	Adjudicatario
Cultura	Servicios de sala para el funcionamiento del Teatre del Raval de esta Ciudad	Acuerdo JGL de 23/02/2018	Salzillo Servicios Integrales SLU.
	Servicio de gestión y dirección de la Escuela Municipal de Teatro	Acuerdo JGL de 11/02/2019	Víctor Antolí Salvá
Educación	Servicio de transporte escolar para alumnado del Raval Universitari, curso 2019-2020	Decreto Concejal n.º 2019-6912 de 05/09/2019	La Hispano del Cid, SA,
Juventud	Servicio de gestión y dinamización de los locales municipales de ensayo para jóvenes Tetuán XIV Music Boxes	Acuerdo JGL 07/03/2019	Antonio Porcar Martí
Igualdad	Servicio "Escola de Matí i de Vesprada"	Acuerdo JGL 28/07/2017 y prórroga servicios JGL 07/03/2019	Ofertas Costa Azahar SL
	Servicio de instalación y retirada de los escenarios en vías pública y en edificios municipales	JGL 28/06/2018	Juan José Sanchez López, SA
Ordenación del territorio	Servicio de monitorización acústica en continuo de la zona ZAS de Tascas en la ciudad de Castelló de la Plana	Decreto 27/12/2019	Acústica y Telecomunicaciones, SL
	Servicio de recogida de troncos de palmeras en Castelló de la Plana	JGL 24/05/2019	Vivers Centre Verd, SA

Se suspende parcialmente la concesión del servicio de transporte urbano adjudicado a Autotransportes Colectivos Castellonenses S.A. en virtud del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de marzo de 2013 en los términos fijados en su escrito previamente consensuados con la Concejalía Delegada, al apreciar la imposibilidad de ejecución total del contrato como consecuencia de la situación descrita anteriormente.



Los contratos indicados se reanudarán cuando hayan cesado las circunstancias o medidas que impiden su prestación. El órgano de contratación notificara al contratista el fin de la suspensión.

Quinto.- Se requiere a los contratistas citados cuyos contratos quedan suspendidos total o parcialmente así como a los adjudicatarios de los contratos ya suspendidos con anterioridad (ORA y bicicas) para que en cinco días naturales presenten la instancia a que se refiere el artículo 34.1 del RDL 8/2020 (a los efectos de no perjudicar al contratista y no generarle indefensión). Si la presentan tendrán derecho a la indemnización por daños y perjuicios efectivamente sufridos durante el período de suspensión y al restablecimiento del equilibrio económico del contrato, en el caso de la concesión si se acredita fehaciente su realidad, efectividad y cuantía. En el caso de que no se presente los contratistas no tendrán derecho a la indemnización prevista en el artículo 34.1 y 4 del RDL 8/2020.

Sexto.- Sin perjuicio de que por el Ayuntamiento se acuerde la suspensión total o parcial de las prestaciones de un contrato a la vista de que resulta constatado y patente que su ejecución deviene imposible debido a las medidas gubernamentales consecuencia del COVID 19 que se vayan adoptando, a instancia del contratista el órgano de contratación podrá apreciar la imposibilidad de ejecución parcial o total de cualquier contrato público de servicios o suministros de prestación sucesiva en vigor debido a las referidas medidas.

Con esta finalidad los contratistas deberán dirigir su solicitud al órgano de contratación reflejando: razones por las que la ejecución del contrato ha devenido imposible; personal, dependencias, vehículos, maquinaria, instalaciones y equipos adscritos a la ejecución del contrato en ese momento; y los motivos que imposibilitan el empleo por el contratista de los medios citados en otro contrato. Las circunstancias que se pongan de manifiesto en la solicitud serán objeto de posterior comprobación.

El órgano de contratación en el plazo de cinco días naturales apreciará la imposibilidad de ejecución del contrato y transcurrido el plazo indicado sin notificarse la resolución expresa al contratista, esta deberá entenderse desestimada.

En caso de que se lleve a cabo la suspensión total o parcial del contrato, el contratista tendrá derecho al abono de los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste durante el período de suspensión, previa solicitud y acreditación fehaciente de su realidad, efectividad y cuantía en los términos del referido artículo 34.1 del RDL 8/2020.

Séptimo.- En el caso de que el contratista respecto a los contratos de servicios y de suministro distintos de los referidos en el apartado anterior, vigentes a la entrada en vigor de Real Decreto-ley 8/2020, que no hayan perdido su finalidad como consecuencia de la situación de hecho creada por el COVID-19, incurra en demora en el cumplimiento de dichos plazos como consecuencia del COVID-19 o las medidas adoptadas para combatirlo, podrá solicitar la ampliación del plazo inicial o la prórroga en curso siempre y cuando ofrezca el cumplimiento de sus compromisos si se le amplía el plazo inicial o la prórroga en curso. El órgano de contratación resolverá previo informe del responsable del contrato, donde se determine que el retraso no es por causa imputable al contratista, sino que se ha producido como consecuencia de lo indicado.

En estos casos, no procederá la imposición de penalidades al contratista ni la resolución del contrato y los contratistas tendrán derecho al abono de los gastos indicados en el art 34.2 del RDL 8/2020 en los términos que se indican en el mismo previa solicitud y acreditación fehaciente de la realidad, efectividad y cuantía por el contratista de dichos gastos.

Octavo.- En relación a los contratos de servicios o suministros de tracto sucesivo cuyas prestaciones están en función de las necesidades municipales que se mantengan en vigor durante la duración del estado de alarma, y hayan visto reducidas sus prestaciones a consecuencia de la situación de hecho creada por el COVID 19 o las medidas adoptadas para combatirlo, una vez cesadas las circunstancias, a solicitud del contratista y debidamente acreditado, previo informe del responsable del contrato, el Ayuntamiento determinará la posible indemnización de daños y perjuicios que pudieran corresponderle en los términos del artículo 34 del RDL. 8/2020.

Noveno.- Respecto a los contratos de obras en ejecución que, de acuerdo con el «programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra» estuviese prevista la finalización de su plazo de ejecución entre el 14 de marzo, fecha de inicio del estado de alarma, y durante el período que dure el mismo, y como consecuencia de la situación de hecho creada por el COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado no pueda tener lugar la entrega de la obra, el



contratista podrá solicitar una prórroga en el plazo de entrega final siempre y cuando ofrezca el cumplimiento de sus compromisos pendientes si se le amplía el plazo inicial. El órgano de contratación resolverá sobre la misma, con informe preceptivo del responsable del contrato, en este caso, del Director facultativo de la obra.

Acordada, en su caso, la prórroga del plazo solo serán indemnizables los conceptos expresamente recogidos en el art 34.3 del RDL. 8/2020.

En el caso de que por cualquier circunstancia o medida que se pudiera adoptar por el gobierno se acuerde la paralización de las obras lo será con las medidas de seguridad necesarias adoptadas por el contratista, a quien en todo caso corresponde la posesión de las obras desde el acta de comprobación del replanteo.

Asimismo, las obras paralizadas deberán balizarse y cerrarse. Tal medida se ejecutará por la empresa contratista de la obra, adoptándose las medidas necesarias durante la suspensión para garantizar la integridad del cierre y seguridad.

Si las empresas contratistas deciden no solicitar la suspensión del contrato, deberán aportar un anexo al Plan seguridad y salud en los términos establecidos en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, acompañado de un informe del Coordinador de seguridad y salud que apruebe el mismo y en el que conste expresamente que durante la ejecución de la obra se dará cumplimiento a todas y cada una de las medidas sanitarias acordadas por la OMS, Ministerio de Sanidad y Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública relativas al COVID- 19, o que puedan acordar.

Asimismo, respecto al resto de contratos que se mantiene en vigor o suspendidos parcialmente los contratistas deberán presentar al Ayuntamiento el plan de contingencia o protocolo de actuación para hacer frente al coronavirus que garantice la seguridad y salud de los trabajadores y el cumplimiento de las medidas sanitarias indicadas.

Décimo.- Los concesionarios de obras o de servicios a los que les afecten las medidas establecidas para combatir el COVID 19 lo comunicarán al órgano de contratación el cual apreciará la imposibilidad de ejecución del contrato. La suspensión de la concesión dará derecho al reequilibrio económico del contrato en la forma establecida en el artículo 84 del RDL 8/2020.

Undécimo.- Cuando a la fecha de vencimiento de contratos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación como consecuencia de la paralización de los procedimientos de contratación derivada de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y no pudiera formalizarse el correspondiente nuevo contrato, se prorrogara el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato por un período máximo de nueve meses conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 29.4 de la LCSP, con independencia de la fecha de publicación de la licitación de dicho nuevo expediente en aplicación del artículo 34.1 del RDL 8/2020.

Duodécimo.- En relación a los contratos menores cada negociado, sección o concejalía resolverá lo que estime oportuno en atención a las características y circunstancias de la prestación contratada. Se remitirá a estos efectos el informe de la Abogacía del Estado a todos los departamentos dada su relevancia en este asunto.

Decimotercero.- La presente resolución tiene carácter temporal por el tiempo estrictamente necesario para hacer frente a la emergencia sanitaria derivada del COVID 19 y en particular durante la duración del estado de alarma acordado mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Décimocuarto.- Comunicar la presente resolución a todos los servicios y departamentos municipales”.

Lo que se hace público para su general conocimiento.

